



HACIA UN NUEVO HORIZONTE DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

*Contención, solidaridad y geoestrategia,
en el juego de la economía, la guerra y la salud*

JUAN JOSÉ TÉLLEZ RUBIO

Escritor y periodista. Desde 1976 ha ejercido el periodismo en Diario 16 Andalucía, La Tribuna de Algeciras, la agencia Efe, Diario de Cádiz, Diario de Sevilla, semanarios como Cambio 16, Panorama, El independiente, Mundo Obrero o El Observador, y también en radios como Canal Sur o la cadena SER. En 1989, se incorpora como redactor jefe al equipo fundador del diario Europa Sur, en Algeciras. Tres años más tarde, ocupará ese mismo cargo en Diario de Cádiz, en donde dirigirá un suplemento semanal titulado Domingo, y en 1994, fue nombrado director de Europa Sur, responsabilidad que mantendrá hasta 1998. En esa fecha, pasa a ser subdirector de Diario de Cádiz, participando como guionista en la coproducción La vuelta a Cádiz en 80 mundos. Posteriormente se incorpora al Diario de Sevilla, cabecera en la que actualmente sigue colaborando, aunque simultanea dicho cometido con la realización del programa de radio Bienvenidos, para Canal Sur, tertulias en esa misma emisora, o asesora programas televisivos como La llamada del Sur o Andalucía sin fronteras. Al mismo tiempo, su firma aparece ocasionalmente en El Semanal o se incorpora a libros periodísticos como Andalucía, crónica de un sueño, editado por Unicaja y que fue anticipado en formato facsímil por El País, en febrero de 2001. Ha realizado numerosos guiones para radio y televisión.

La solidaridad era la ternura de los pueblos, a decir de Eduardo Galeano. De los pueblos, sí; pero no habitualmente de sus gobiernos. Los estados en general, como bien es sabido, no tienen ideología sino intereses. Y el concepto de cooperación internacional, se ha utilizado al par de un complicado juego de ajedrez en el que converge ocasionalmente –sólo de pascuas a ramos– la fraternidad pero habitualmente responde a la geoestrategia de cada país y, en todo caso, al posible efecto de contención de la presión migratoria irregular.

En los últimos cincuenta años, la poderosa transformación económica y política del mundo ha conllevado un largo tránsito desde el modelo clásico de colonialismo al de la actual globalización mercantil que encierra nuevas pautas de neocolonialismo, aunque hayan aparecido elementos tan contradictorios como el hecho cierto de que los procesos de independencia del Tercer Mundo no hayan deparado necesariamente la liberación de los antiguos territorios sojuzgados. Más contradicciones: el antiguo esquema de los distintos mundos, primero, segundo y tercero, enunciado durante la Guerra Fría, también ha caído en saco roto a favor del concepto sociológico de cuarto mundo, que identifica a la población excluida, a los nadie –en palabras nuevamente de Galeano– en naciones de recursos económicos sobrados. El término, acuñado por el reverendo Joseph Wresinski, empezó a utilizarse en los años 70 del pasado siglo, sobre los escombros de otras concepciones económicas y vitales como justicia y caridad, principalmente.

Si el auxilio caritativo, de puertas para adentro, servía para aliviar conciencias religiosas o republicanas, la solidaridad internacional también tenía en parte esa misión, compensar ilusoriamente por el PIB más alto a aquellos que estaban a los pies de la tabla de la economía mundial. Sin embargo, no nos engañemos, también mantuvo siempre una clara apuesta por el intervencionismo político encubierto. Y, a pesar de ambas pulsiones, jamás logramos alcanzar la meta del 0,7 por ciento de los presupuestos públicos para atender a los pobres propios o ajenos.

La crisis económica cuyos síntomas mayores surgen a partir de 2008 ya no es sólo mundial como las anteriores –1973, 1993, por ejemplo–, sino global, lo anega todo sin el añejo cortafuegos ideológico del Pacto de Varsovia y con las bienaventuranzas bíblicas tan profundamente en entredicho que, en años sucesivos y hasta hoy, empiezan a ganar las elecciones aquellos candidatos que más pregonan su incumplimiento.

En ese contexto, las naciones empiezan a perder soberanía propia para entregarla a proyectos macropolíticos o porque sucumben al control de la banca y de las transnacionales. Las cuentas públicas hay que ajustarlas a la avaricia de los lobbies o a la contención del déficit público, como nuevo dogma de fe. Así que, frente a reyes y reinas, alfiles, torres y caballos, en este ajedrez siguieron perdiendo los peones, fuesen propios o extraños.

El neoliberalismo de puertas abiertas provoca que las mercancías y los capitales se muevan tan libremente a lo largo del orbe que se establece una nueva frontera entre la economía real, la que afrontan a diario los menos favorecidos de cualquier parte, y la economía virtual, un raro avatar de macrocifras, deslocalizaciones fabriles, paraísos fiscales, precarización del empleo y abaratamiento de salarios. José Saramago lamentaba a menudo que en el momento histórico que más democracias formales existían en el planeta, también teníamos clara la percepción de que los gobiernos salidos de las urnas no gobernaban de facto sino que servían como títeres de más o menos remotos consejos de administración cuyos plenarios no eran elegidos con sufragio universal. Así, en un raro zigzag offshore, ingentes sumas de dinero traspasaban ciberfronteras desde las islas del Canal de la Mancha a Suiza, Nueva York o Tokyo, mientras los grandes buques portacontenedores traían y llevaban mercancías no siempre adecuadamente supervisadas por las autoridades aduaneras. La paradoja estriba en que mientras se aceptaba de grado tales circunstancias, comenzó a prosperar el criterio de que estaba bien que capitales y bienes campasen por sus respetos por encima de cualquier muro, pero el ser humano no podría hacerlo. Como si nos empeñáramos en negar la realidad de la historia, que siempre navegó al socaire de las migraciones.

Había que contener los migrantes, esa era la consigna, incluso en países con severa caída demográfica como era el caso de España. Tendría que ser, primero, se dijo, un flujo regularizado aunque para ello se endurecieron hasta la caricatura las condiciones en las que fuera posible darles papeles y visados. Se les dividió entre migrantes económicos y políticos, cuando difícilmente se aceptaba que el hambre fuera una causa claramente política para emigrar; cuando apenas se entendía que la salud y la huida de las pandemias también podría ser una razón fieramente humana para dejar un país y buscar cobijo en otro. Para colmo, ni siquiera aquellos que, según todas las convenciones firmadas o por firmar, tenían pleno derecho para solicitar refugio o asilo porque sus vidas corrían peligro, se les permitía entrar en numerosísimos países, en los USA, en Asia, en China o en la Unión Europea.

Empezó a prosperar la creencia de una invasión que no era tal: tanto en Estados Unidos como en Europa, se cifra que unos once millones de personas no tienen documentación en regla y son susceptibles de deportar, en los actuales tiempos de miedo y proteccionismo. ¿Están todos vinculados a las mafias o cubren en realidad empleos honestos cuya mayor deshonestidad estriba en la inexistencia de contrato, de derechos y, por ello también, de deberes cívicos?

Así, en un progresivo aunque a veces tácito discurso xenófobo y racista, los inmigrantes venían a ocupar los trabajos que podrían realizar los pobres nacionales. ¿De veras era así? La estadística apunta a que, incluso en momentos de paro endémico, salían al mercado miles de empleos que no aceptaban los parados locales, hasta que pasaban a manos humildes y extranjeras. En cualquier caso, se decía: para que no vengan hasta aquí, habrá que invertir en sus países de origen, para que puedan quedarse en la quinta puñeta y no vayan a imponer con su presencia una interculturalidad no deseada.

Esa ecuación se ha roto en los últimos nueve años de una manera dramática. La cooperación al desarrollo ha caído en general por debajo del 70 por ciento del presupuesto anterior en países como el nuestro, pero también se ha desplomado la atención social al lumpen proletariado, a los más humildes o a una clase media empobrecida que ha terminado acudiendo a los bancos de alimentos desde el cuento de hadas de las preferentes y los créditos hipotecarios impagados. En el imaginario al uso –más oficioso que oficial– ya no parecía legítimo invertir, por ejemplo, en el desarrollo de Marruecos porque podía perjudicar al nuestro o porque era necesario atender a las necesidades de esta orilla antes de exportar nuestra supuesta generosidad a otros pagos. Pero es que tampoco nuestros gobiernos atendieron la emergencia de la pobreza a este lado del mundo, porque el populismo tendía a la contra: la reforma sanitaria que proyectaba Donald Trump, un presidente al que votaron cincuenta millones de electores, iba a dejar sin cobertura médica a más de veinticuatro millones de personas en la próxima década, para ahorrar, eso sí, 337.000 millones de dólares a las arcas públicas estadounidenses. ¿Fracasó acaso en su primer intento por protestas masivas de la ciudadanía? No fue así. Su proyecto legislativo hizo aguas porque el Tea Party republicano exigía medidas más contundentes aún.

Pobres de dentro, pobres de fuera, unos y otros lo tienen jodido en este tiempo de ricos y contables. Lo que importa, visto lo visto, es el dinero y no la gente. Siempre fue así, pero ahora, *más*. A escala internacional, la ayuda humanitaria española pasó de contabilizar 180 millones de euros en 2011 a 42 millones en 2013. Al año siguiente, mediante créditos extraordinarios, subió a 57 millones. ¿Suficientes para asistir a 141 millones de personas, afectadas ese año por conflictos armados desde Siria a Yemen o República Centroafricana?

Oficialmente, la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aecid) articula, en nuestro caso, ayuda o asistencia oficial para el desarrollo (AOD), es decir, todos los desembolsos netos de créditos y donaciones realizados según los criterios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La AOD española en 2012 ascendió a 1.585,5 millones de euros y la AECID participó en un 24% del total con un presupuesto de 386 millones de euros. En 2013 la AOD española total neta fue de 1.769,9 millones de euros. Durante ese año la AECID gestionó el 17% del total de la AOD española con un presupuesto de 294,7 millones de euros. En 2014, se gestionaron 1.414,4 millones de euros. La AECID gestionó el 18%, con un presupuesto de 251,1 millones de euros.

La caída de fondos fue vertiginosa, como puede comprobarse, hasta que en 2015 la AOD española superó de nuevo la cota de 2012, hasta situarse en 1.873,8 millones de euros, aunque a ciencia cierta la AECID gestionó tan sólo el 14% con un presupuesto de 255 millones de euros, muy por debajo de los 386 millones de tres años antes.

“Después de sufrir un descenso acumulado de cerca del 70% desde el inicio de los recortes hace cinco años, el presupuesto destinado al programa de cooperación al desarrollo del Ministerio de Exteriores en 2015 experimenta una sutil subida de 25 millones más con respecto a este año. Con un alza de alrededor del 5%, el Gobierno se limita a recuperar los niveles anteriores a la caída de 2014: 519,34 millones de euros, frente a los 1.971 millones con los que contaba en 2011”, analizaba Gabriela Sánchez en “Desalambre”, de Eldiario.es.

El programa de Cooperación al desarrollo del Ministerio de Exteriores contaba en 2011 con 1.971 millones de euros. Al año siguiente, todavía durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, dicha partida se quedó, de la noche a la mañana, en 679 millones. El descenso de los fondos continuó a partir de la victoria del Partido Popular de Mariano Rajoy, hasta quedar reducidos sus presupuestos en 2014 a tan sólo 494 millones de euros, de los que en 2015 recuperaría 25 millones. Todo ello, dirigido a 23 países prioritarios, según el nuevo plan establecido por La Moncloa y el Palacio de Santa Cruz.

A menudo, se ha intentado inflar las cifras de ayuda, incorporándoles los datos relativos a los costes de la acogida de refugiados e incluso los de la lucha contra el cambio climático, como una formidable maniobra de distracción. Para colmo, más de una vez las previsiones presupuestarias en materia de Ayuda Oficial al Desarrollo no han llegado a ejecutarse en su totalidad. En su documento “La cooperación española en la nueva legislatura 2016-2020: El regreso de España a la comunidad de donantes”, la ONG Oxfam realizaba un riguroso análisis de la legislatura española que se cerró en diciembre de 2015, en el que aseguraba, por ejemplo, que en 2014 se ejecutó únicamente el 37 por ciento de la AOD asignada al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Oxfam denuncia, respecto a dicha etapa, la “ausencia de una estrategia fuerte y una visión clara sobre la contribución que le corresponde a España en la Comunidad Internacional”.

“El distanciamiento con la política de desarrollo del Gobierno y en particular y paradójicamente, del propio Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), volcado en la promoción de los intereses comerciales españoles en el exterior, ha tenido un efecto profundo. Y ha dejado un vacío estratégico que ha hecho muy difícil una actuación consistente con recursos cada vez más limitados, y sin respaldo político e institucional”, podía leerse en sus páginas virtuales.

El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) es una organización multilateral, que forma parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que se dedica, sobre el papel, al seguimiento y la evaluación de las políticas de desarrollo de los países integrantes. Así, analiza el programa de ayuda de cada país, dirige recomendaciones sobre los esfuerzos de ayuda, sus condiciones y sus modalidades financieras. Del

CAD, forman parte Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Eslovaquia, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Japón, Corea del Sur, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Suecia, Suiza, Reino Unido y, en su totalidad, la Unión Europea

Según el riguroso análisis de Oxfam, “España se sitúa en el puesto 22º entre los donantes del CAD (llegamos a ser el noveno donante en 2008), al nivel de donantes recién llegados como Eslovenia o República Checa”. Aunque los Presupuestos Generales del Estado previstos para 2016 apuntaban un cambio de tendencia, dicha ONG sigue mostrándose escéptica ante los repetidos anuncios del presidente Rajoy de recuperar los montos de la cooperación española en cuanto se recuperase la economía: “Los PGE 2016 parecen apuntar a un cambio de tendencia, con una previsión de 2.396 Mill. € de AOD (0,21% /RNB), aunque buena parte de este esperanzador incremento se sustenta en la presupuestación de contribuciones multilaterales atrasadas de ejercicios anteriores, y en el mantenimiento de una elevada partida de ayuda reembolsable cuyo desembolso se ha incumplido año tras año en el período”.

Durante años, ciertos presupuestos en materia de cooperación al desarrollo se canalizaron a través de organismos cuyo objetivo prioritario no era ese. Así surgió en su día la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión o Frontex (del francés “Frontières extérieures”, fronteras exteriores). Se trata de una agencia de la Unión Europea (UE), con sede en Varsovia y cuyo fin es mejorar la gestión integrada de las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión.

Hasta ahora, sus misiones fundamentales habían estribado, oficialmente, en Coordinar la cooperación operativa entre Estados miembros en materia de gestión de las fronteras exteriores, establecer un modelo de evaluación común e integrada de los riesgos, asistir a los Estados miembros para la formación de sus guardias de frontera, realizar seguimiento de la evolución de la investigación en materia de control y vigilancia de las fronteras exteriores, apoyar a los Estados miembros para organizar operaciones de retorno conjuntas, y, esto es, ayudar a los Estados miembros enfrentados a una situación que exija una asistencia operativa y técnica reforzada en sus fronteras exteriores.

Existe también la posibilidad de que el FRONTEX –ahora, bajo la dirección ejecutiva de Frabrice Leggeri– despliegue equipos de intervención rápida en los Estados miembros, por un periodo limitado y en circunstancias excepcionales y urgentes, como una afluencia masiva de nacionales de terceros países que intentan entrar ilegalmente en el territorio. Este último supuesto ha motivado que, en los últimos años, las arcas del FRONTEX deriven hacia la vigilancia del creciente flujo de migrantes –en su mayoría solicitantes de refugio– que intentan entrar en la Unión Europea. Para impedir que lo hagan, claro, aunque también se les preste auxilio en dicho naufragio colectivo.

De hecho, durante 2016, el presupuesto de la agencia pasó a ser de 250 millones de euros frente a los 150 del año anterior, con un incremento de personal y recursos complementarios como los buques desplegados en el Mediterráneo.

Detrás del FRONTEX estuvo, en su día, el refuerzo en las vallas de Ceuta y Melilla o el freno a la salida de cayucos desde Mauritania y Senegal rumbo a Canarias, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y bajo la tutela efectiva de María Teresa Fernández de la Vega, como vicepresidenta del Gobierno. Se trataba, en gran medida, de una Vuelta de tuerca a la interpretación del codesarrollo que había formulado Sami Naïr en su célebre Informe de balance y orientación sobre la política de codesarrollo en relación con los flujos migratorios, por encargo de la Misión Interministerial sobre Migración y Codesarrollo del Gobierno francés, en 1997.

El objetivo de su informe, como resumía Janina Ruth, de la Universidad Complutense, en un artículo publicado por “El País”, era “proponer un marco teórico, unos objetivos específicos y una metodología de acción” para la “gestión de flujos migratorios” y no del desarrollo: “Francia ya no puede (...) acoger masivamente nuevos flujos migratorios y (...) tiene que actuar sobre las causas de las migraciones”, entre las que citaba “miseria, desarrollo desigual, éxodo rural descontrolado y anarquía urbana”.

“Con el codesarrollo, Naïr esperaba frenar estos flujos e integrar en Francia a los residentes extranjeros. Vio en los inmigrantes a sus actores principales, siempre que tuvieran permiso de residencia, y también quiso implicar a asociaciones de inmigrantes o en favor del desarrollo, universidades, y las administraciones regional y local”.

Según la síntesis de Rutz, “Nair calificó la salida de profesionales cualificados como “una nueva forma de saqueo del Tercer Mundo”. Por eso propuso formar a los inmigrantes que llegaban Francia para que después pudieran volver a sus países y fomentar la migración circular, es decir, una constante ida y venida de migrantes entre sus países de origen y de destino. Por otro lado, sostenía que debía incentivarse a los residentes permanentes en suelo francés para que dedicaran las remesas de dinero que enviaban de vuelta a casa a inversiones en el sistema productivo o en proyectos de desarrollo. También sugería que París estableciera convenios de codesarrollo con los países de los que más inmigrantes recibía”.

La idea se extendió a determinados postulados del Plan Greco, en el Santiago y cierra España de las leyes y normas de extranjería que siguieron a la Ley 4/2000 en nuestro país. El codesarrollo se supeditaba a que los países de donde procedían los inmigrantes se convirtieran en gendarmes de la Unión Europea.

Así, inspiró también algunas acciones llevadas a cabo a la sombra del FRONTEX, que no es una agencia inversora en materia de desarrollo pero sin embargo sus fondos han sido utilizados parcialmente para ello, en un curioso toma y daca con algunos gobiernos africanos. Sorprende como playas como la de Thiaroye Sur Mer, cerca de Dakar, dejaran de ver zarpar a cientos de espaldas mojadas a partir de que el gobierno español y el senegalés alcanzaran un acuerdo que sirvió, por ejemplo, para comprar el refuerzo en la vigilancia de la zona, a cambio de crear una serie de talleres para la promoción de la población excluida, especialmente las mujeres. Allí, por ejemplo, tuve ocasión de dialogar con Mama Yaya, quizá el rostro más conocido de la sociedad civil local y que impulsó una asociación para luchar contra las migraciones sin garantías: “Muchas hemos perdido a nuestros hijos en la mar, o a nuestros seres queridos, y fue por ello por lo que decidimos poner en marcha esta asociación contra la inmigración clandestina para que la gente pueda vivir dignamente en su país”, me dijo.

“Comenzamos a organizar las mujeres cuyos hijos desaparecieron en la mar, algo difícil porque estamos en una comunidad tradicional donde la mujer no ha estado considerada, no ha estado en la jerarquía de la comunidad –afirmaba–. Nosotros tuvimos que tomar la palabra, convencer a la comunidad, a las autoridades locales y nacionales sobre lo que queríamos poner en marcha. Hemos aprovechado la transformación de la comunidad

musulmana para organizar las actividades religiosas. Durante el ramadán de 2007, por ejemplo, organizamos un encuentro con la implicación de un marabú que explicó como la mujer del profeta, Sediya Aicha, jugó un papel fundamental para que el Islam llegara a nuestras costas. Ahí la comunidad empezó a comprender nuestro proyecto de desarrollo”.

Su discurso sorprendía en un país que, como en otras naciones africanas, crecían las inversiones interesadas de potencias como China o Corea, a la búsqueda de yacimientos energéticos o propiedades donde cultivar los víveres del futuro. Mientras el dinero coreano financiaba en Dakar la erección de un gigantesco monumento a la independencia africana, los senegaleses emigraban a mansalva hacia el norte, ya fuera por vía terrestre o marítima, ya fueran griots en busca de escenarios donde ejercer su arte o licenciados que acababan como manteros en las calles españolas: “No hay un número exacto de desaparecidos en el camino a Europa. No hacen falta las estadísticas para ver como en cada familia hay gente desaparecida”, lamentaba Mama Yaya, cuyo proyecto no apartaba reivindicaciones muy claras –“liberad el visado, liberad la frontera para todos aquellos que quieren ir a trabajar”–, pero apostaba por un desarrollo local como la mejor alternativa al largo éxodo senegalés.

“Si, hay gente que quiere partir, también aquí en Tiaroye Sur Mer, pero si frente a todo ello, apostamos por la sensibilización, por la concienciación, por el desarrollo, la gente no tendrá ganas de hacer eso, sino que podrán tener una opción para trabajar aquí, para crear aquí”.

Para todo ello, Mama Yaya logró crear una red de contactos que consiguió pulsar teclas importantes para conseguir financiación: “Esa gente que emigra no son bandidos, es gente desesperada que se echan al mar y que quiere trabajar por el país a donde llegan –resumía junto a aquella arena de sueños rotos–. Ese reto lo hemos afrontado gracias a la colaboración española, la Fundación CEAR, la Junta de Extremadura, por ejemplo... A partir de ahí muchas organizaciones de mujeres nos dieron su apoyo. Tenemos muchos socios españoles que nos ha permitido, a través de una cooperación descentralizada que ha hecho visible a la sociedad civil. La cooperación con las asociaciones de base es más palpable que entre los estados. Nosotros hemos probado que España y Senegal, a través de la cooperación, ha podido afrontar la inmigración clandestina. Con las mujeres es posible”.

Los recortes en materia de cooperación alcanzaron igualmente a las comunidades autónomas y a los municipios, que habían sido muy activos en esta materia durante las décadas anteriores, bien a través de su propia iniciativa o mediante las diputaciones, las mancomunidades o las federaciones de la administración local. La crisis económica llevó a una categorización de competencias para los municipios, a partir de la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local que se llevó a cabo en 2013 y que ata en corto las alas de la cooperación por parte de dichas entidades. A comienzos del siglo XXI, las comunidades invertían en cooperación alrededor de 450 millones de euros, con un 0,25 por ciento del presupuesto de gastos, un horizonte que, si se superan las actuales políticas de contención, sólo sería factible recuperar en 2020, según las previsiones más optimistas al respecto.

En esa línea, durante los últimos dos años, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), ha firmado con el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), ha cerrado un acuerdo específico de colaboración para actuaciones al amparo del Plan Andaluz de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2015-2018 (PACODE), y destinado a seis proyectos a desarrollar en Marruecos, Mauritania, Cuba y Andalucía.

¿Es posible recuperar el tiempo perdido so pretexto de la crisis de 2008?

Frente a la desesperanza generalizada y a la resignación pasiva, el movimiento de las ONGD reclama medidas de ayuda a los refugiados, a los desplazados y a los migrantes: alrededor de 60 millones de personas, al menos, que constituyen un país nómada al que a menudo se le cierra la puerta o se deslocalizan los campos de refugio como ocurriera en marzo de 2016 cuando la Unión Europea delegó en Turquía la supuesta acogida a los fugitivos de la guerra, la miseria, la corrupción y el resto de los jinetes del apocalipsis que cabalgan por el Magreb, el Mashreq y Oriente Próximo.

¿Podrán reinventar una nueva política de desarrollo internacional como pretenden? Difícilmente. Malos tiempos para algunos de los indicadores que reclaman, como “la protección de civiles en zonas en conflicto, la lucha contra la pobreza, la defensa de los derechos humanos y la transversalización del enfoque de género”, tal como puede leerse en el documento de Oxfam. Malos tiempos para esa última bandera cuando al Gobierno del Partido Popular, en 2012, no le tembló el pulso a la hora de

cerrar la oficina de ONU Mujeres que había sido abierta en Madrid, quizá como medida de presión en su implacable cacería política contra la ex ministra de Igualdad, Bibiana Aído, que contribuyó a poner en marcha dicho organismo después de haber promulgado en España una nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que puso en pie a la jerarquía eclesiástica y a los sectores más conservadores del país.

Lo cierto es que hay que poner en práctica el Plan Director 2017-2020 para guiar la acción del Gobierno español en el ámbito de la Cooperación durante esta legislatura, empezando por un incremento en la cuota de reasentamiento de refugiados. El mejor antídoto contra la barbarie de la que huyen, en cualquier caso, sigue siendo la cooperación al desarrollo, pero también de la ayuda humanitaria, que el movimiento asociativo cifra al menos en un presupuesto de 150 Mill. € en 2017, para tender al 10% de la AOD total en 2020, en una recuperación progresiva que debería alcanzar el 0,4 de la Renta Nacional Básica en 2020. Sin embargo, de nada valdría todo ello sin un compromiso claro en la gestión de dichos fondos, para evitar que buena parte de ellos no lleguen a ejecutarse como ha ocurrido en ocasiones.

En ese contexto y ante el escenario de un Parlamento plural como el que abrieron las elecciones de junio de 2016, el acuerdo en esta materia tendría que ser tan necesario como hoy se presume improbable. Ante la inevitable reforma de la AECID, algunas ONGs reclaman, en tal sentido un ministerio específico o una vicepresidencia que aglutine materias tan delicadas como la de la cooperación, con otras como puedan ser medio ambiente o migraciones. Según Oxfam, “la Legislatura pasada ha demostrado que el modelo actual no permite influir en la agenda gubernamental y que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación ha dejado de ser, de facto, el Ministerio responsable de impulsar y ejecutar la política de Cooperación. Se requiere también una presencia cualificada en los espacios internacionales de decisión, y con profesionales especializados con acreditada experiencia y probada capacidad ocupando los puestos de responsabilidad”.

“El Plan Director 2017-2020 deberá definir las nuevas prioridades geográficas de la Cooperación Española bajo criterios transparentes, entre los que primen los relacionados con los niveles de pobreza y la desigualdad, la trayectoria y la ventaja comparativa de España como donante, y no

otros de índole meramente estratégicos o comerciales. La cooperación con los países menos adelantados deberá alcanzar el 25% de la ayuda geográficamente especificada, acercándose paulatinamente al 50%. En el ámbito sectorial, es prioritario recuperar la inversión en servicios sociales básicos hasta alcanzar el 25% de la ayuda sectorialmente especificable, seguir avanzando en la predictibilidad de la ayuda (ayuda programable país) y potenciar el enfoque de género. En el ámbito de innovación conviene profundizar la apuesta iniciada en materia de gestión del conocimiento. Asimismo, es necesario un trabajo en clave de aliados estratégicos entre la AECID y ONGs, tanto como sector en algunos aspectos, como con entidades especializadas en algunas materias prioritarias”. Eso sostiene Oxfam pero también lo incluyen otras organizaciones en su plataforma reivindicativa.

Para que todo ello sea posible, sin embargo, lo más importante estriba en recuperar el discurso, aquel relato de la utopía posible que recomendaba que la cooperación no fuera concebida como un gasto superfluo sino como una inversión, aunque fuera en materia de seguridad y no en dignidad como debiera serlo. ¿Es posible seguir cantando Imagine en tiempos como estos, donde crecen los muros y los compartimentos estancos? La respuesta a esa pregunta dibujará el horizonte inmediato de la cooperación.

Bibliografía

ALCALDE, A., BOSSUYT, J., CABO, C., MARTÍNEZ, I., SOTA, J., VALERO, I., La sociedad civil en la cooperación al desarrollo del siglo XXI. Propuestas desde la ciudadanía, Cideal, 2011.

ALONSO, José Antonio y José Antonio Sanahuja (2006), “Un mundo en transformación: repensar la agenda de desarrollo”, Intermón Oxfam, La realidad de la ayuda 2006-2007, Barcelona, Intermón Oxfam, 2006.

ALONSO, J. A. (dir.), Financiación del desarrollo. Viejos recursos, nuevas propuestas, Madrid, Siglo Veintiuno, 2009.

ALONSO, José Antonio y Paul Mosley (eds.), La eficacia de la cooperación internacional al desarrollo: evaluación de la ayuda, Madrid, Cívitas, 1999.

ALONSO, José Antonio y Christian Freres (eds.) Los organismos multilaterales y la ayuda al desarrollo, Madrid, Cívitas, 2000.

ALONSO, JOSÉ ANTONIO y FITZGERALD, VALPY (eds.), Financiación del desarrollo y coherencia en las políticas de los donantes, Madrid, Ed. La Catarata, 2003.

ALONSO, J. A. Y GARCIMARTÍN, C., Acción colectiva y desarrollo. El papel de las instituciones, Madrid, Editorial Complutense, 2008.

ALONSO, J. A. (dir.); AGUIRRE, PABLO; MADRUEÑO, ROGELIO y MILLÁN, NATALIA; Coherencia de políticas para el desarrollo en cinco donantes del CAD: Lecciones para el caso español, Madrid, Fundación Carolina-CeALCI, 2010.

ATIENZA, Jaime, La Deuda Externa y los pueblos del Sur. El perfil acreedor de España, Manos Unidas (2ª edición), 2000.

DÍAZ-SALAZAR, Rafael, Redes de Solidaridad Internacional. Para derribar el muro Norte-Sur, Madrid, HOAC, 1997.

GÓMEZ-GALÁN, Manuel y José Antonio Sanahuja (1999), El sistema internacional de cooperación al desarrollo: una aproximación a sus actores e instrumentos, Madrid, CIDEAL (Edición revisada y actualizada, 2003).

IGLESIA-CARUNCHO, M. (coord.), Acabar con la pobreza, Madrid, IPADE e IUUC-UCM, 2003.

INTERMON-OXFAM, “El regreso de España a la Comunidad de Donantes”. Informe, 2016.

LUCAS, JAVIER DE. El Naufragio en Europa. Ed. Tirant Humanidades. 2015.

LUCAS, JAVIER DE. Globalización e identidades. Icaria Editorial. 2003.

MEYER, Stefan, La cooperación española para el desarrollo: ¿Aspiraciones hechas realidad?, Madrid, FRIDE, documento de trabajo nº 40, julio, 2007.

MILANOVIĆ, B., Los que tienen y los que no tienen: breve y particular historia de la desigualdad global, Madrid, Alianza Editorial, 2012.

MILLÁN, S., SANTANDER, G., AGUIRRE, P. y GARRIDO, A.; La coherencia de políticas para el desarrollo en España. Mecanismos, actores y procesos, Ed. 2015 y más, 2012.

NAÏR, Sami. Informe de balance y orientación sobre la política de co-desarrollo en relación con los flujos migratorios. Misión Interministerial sobre Migración y Codesarrollo. Gobierno de Francia, 1997.

NAÏR, Sami. Refugiados. Ed. Crítica, 2016.

PÉREZ de ARMIÑO, Karlos (Dir.) (2001), Diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo, Barcelona, Icaria – Hegoa

PUERTO SANZ, L- M., Economía para el desarrollo. Lecturas desde una perspectiva crítica, Madrid, Los libros de la Catarata, 2008.

RIST, G., El desarrollo: Historia de una creencia occidental, Madrid, La Catarata, 2003.

RUTH, Janina. “El codesarrollo: qué es”. Diario “El País”, 9 de febrero de 2016.

SANAHUJA, José Antonio, Ayuda económica y seguridad nacional. La ayuda externa de Estados Unidos, del Plan Marshall a la posguerra fría, Madrid, Facultad de Ciencias Políticas - Entimema, 1999.

SANAHUJA, José Antonio, “Los dilemas de la política de desarrollo de la Unión Europea”, en Plataforma 2015 y más, La palabra empeñada. Los objetivos 2015 y la lucha contra la pobreza, Madrid, Los libros de la Catarata, 2004.

SANAHUJA, José Antonio, Altruismo, mercado y poder. El Banco Mundial y la lucha contra la pobreza, Barcelona, Intermón Oxfam, 2001.

SANAHUJA, José Antonio, Guerras, desastres y ayuda de emergencia. El “nuevo humanitarismo” internacional y la respuesta española, Barcelona, Intermón Oxfam, 2002.

SCHULZ, Nils-Sjard, “Las políticas de desarrollo españolas. Obstáculos para el progreso”, FRIDE Policy Brief, 2010.

STIGLITZ, Joseph E, El malestar en la globalización, Madrid, Taurus, 2002.

STIGLITZ, J., El precio de la desigualdad. El 1% de la población tiene lo que el 99% necesita, Madrid, Taurus, 2012.

TEZANOS, Sergio, “Más allá de 2015: Objetivos de Desarrollo del Milenio y desafíos para la nueva agenda internacional de desarrollo”, Sistema, 2011.

TEZANOS VÁZQUEZ, S. (coord.), QUIÑONES MONTELLANO, A., GUTIÉRREZ SOBRAO, D. y MADRUEÑO AGUILAR, R.; Desarrollo humano, pobreza y desigualdades, Santander, COIBA-Universidad de Cantabria, 2013.

TRUEBA, IGNACIO (Coord.), El fin del hambre en 2025. Un desafío para nuestra generación, Madrid, Mundi-Prensa Libros, S. A., 2006.